

PROHIBIDA LA REPRODUCCION Y LA DIFUSION

nacla REPORTING THE AMERICAS SINCE 1967

HOME MAGAZINE WEB PODCAST EVENTS DONATE ABOUT US



El Estado lumpen: Radiografía de la extrema derecha ejerciendo el poder en el Perú

Mientras el gobierno represivo de Perú se vuelve cada vez más autoritario, los movimientos sociales y otros bastiones de la resistencia deben persistir en crear espacios para la democracia.

Roger Melino
September 5, 2024



La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reúne con los líderes de la Ombudsman y el Defensor del Pueblo en el 100º Aniversario de la Constitución de 1979.

Read this article in English.

La asunción al poder de la extrema derecha en el Perú no se dio a través de las urnas. Luego de la caída del presidente Pedro Castillo en diciembre del 2022, la sucesora constitucional, Dina Boluarte, asumió el poder gracias a un pacto con la mayoría conservadora y autoritaria del Congreso. Un pacto sellado con la sangre de 40 personas en el contexto de la primera ola de protestas contra su régimen. Pasarlos de un presidente precario y aislado, con poco consenso con los sectores de izquierda que lo apoyaron y con poco apoyo del sector democrático, a una Presidenta que representa, en realidad, los intereses de la extrema derecha y de diversos sectores de poder económico. Un pacto que el gobierno y con el apoyo de la población y sus representantes políticos, ha convertido al Estado en un aparato represor de la ciudadanía y beneficiador de grupos criminales.

Ejemplos sobran. El Congreso de la República viene aprobando leyes que benefician directamente a quienes antes eran objeto de fiscalización y sanción. Con la llamada "Ley Ambiental" regularizaron la situación legal de empresas tabacaleras del bosque Amambato al permitirles que con la sola posesión del territorio tengan licencia para deforestar. Con la extensión del registro de "mineros informales", se convulsiona un sistema que ha venido desartándose al medio ambiente y los derechos humanos de comunidades locales y mujeres y niñas sujetas a la trata de personas.

Y más. Se vienen aprobando normas que eliminan la posibilidad de fiscalización efectiva en distintos sectores. Desde dueños de universidades, áreas que se enriquecieron ofreciendo programas sin estándares mínimos de enseñanza, hasta a los propios partidos políticos, algunos de ellos investigados por lavado de activos. Hay normas que benefician directamente al sector organizado, como aquella que obliga que el allanamiento con orden judicial a sospechosos solo pueda realizarse "con presencia del abogado", haciendo que esta medida judicial sea inefectiva en la práctica.

"Se ha decretado, en contra de los tratados internacionales, que estos crimenes prescriben beneficiando a militares que violaron, torturaron y asesinaron durante el conflicto armado interno."

El poder político incluso ha beneficiado a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Se ha decretado, en contra de los tratados internacionales, que estos crímenes prescriben, beneficiando a militares que violaron, torturaron y asesinaron durante el conflicto armado interno.

La alianza de extrema derecha que llegó al poder promediando un gobierno tecnocrático, efectivo y democrático cada día aprueba normas de esta naturaleza. Los poderes fácticos que hasta hace poco estaban en los márgenes de la legalidad tienen hoy representantes y operadores que actúan e implementan leyes y políticas abiertamente a su favor.

Algo más que clientelismo

Si el poder argumenta que lo que sucede hoy no es nada nuevo. Desde los orígenes de la República, el Estado peruano ha sido dividido en gran medida como un botín. La pugna entre élites económicas por acceder a privilegios y beneficios públicos, los esquemas de corrupción de los gobiernos de cuello blanco o de forma agapapada, o con hombres de paja, para no mostrar la inmoralidad de forma abierta.

Ya los teóricos del subdesarrollo y sus descripciones sobre el patrimonialismo, clientelismo y corrupción debían dar cuenta de cómo funcionaban estos mecanismos al margen de la legalidad, a veces, a la sombra de la legalidad, torciendo ventajas de las ambigüedades normativas o logrando "beneficios momentáneos" como los privilegios laborales o sectores económicos protegidos durante el desarrollo de los setentas y resurgió desde el neoliberalismo. Gunder Frank, cuando hablaba de "burgues Estados" hace cinco décadas, hace alusión a toda esta historia de mercantilismo y extractivismo que beneficiaba a las élites locales y sus socios internacionales. Lo mismo como metáfora de operaciones que mantenían a los estados en el sub-desarrollo, operaciones tan inmorales, tan injustas, que lindaban con la criminalidad.

"Pero lo lumpen del Estado peruano de hoy no es una metáfora, no linda con la criminalidad."

Pero la lumpen del Estado peruano de hoy no es una metáfora, no linda con la criminalidad. Es, en muchas formas, la víctima de la criminalidad. Un abogado que hizo carrera defendiendo a delincuentes y policías corruptos se convierte en el Estado responsable del orden interno. Uno de los ex Presidentes más sanguinarios y opresores de la historia de Perú, no solo es indultado de forma legal. También le otorgan una pensión vitalicia.

Ya no son actos inmorales que deben esconderse o aislarse. Se muestran de forma abierta, sin vergüenza, para mostrar la victoria de los que operaron en su cancha política, empresarial y militar presionando la ley y los derechos.

Algo más que "atomización política"

La Ciencia Política la explicación de desarrollo de esta situación es la "debilidad de los partidos" o la "atomización y fragmentación política", o la "dilución del poder". Esto se refiere a un fenómeno en el que los partidos políticos se han convertido en emprendimientos privados, familiares o corporativos, sin esquemas programáticos y la ciudadanía estaría "desafecta" de la política, sin ánimos de organizarse políticamente para ejercer oposición. Este diagnóstico es muy limitado.

En primer lugar, si se analiza la movilización social desde el nivel sub-nacional, en las organizaciones indígenas de la Amazonía y el activismo de derechos humanos y ambiental, la ciudadanía no ha cesado de movilizarse, de ejercer política, mucho más cuando Dina Boluarte asumió el poder. Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2001 hasta el 2024 las fuerzas públicas han herido a más de 3.000 personas en el contexto de movilizaciones sociales, 217 de ellas fueron asesinadas por la represión. Según estos datos, solo durante los tres primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, los agentes del estado asesinaron a 49 personas, más de 300 fueron heridos y más de 1.200 sometidos a detenciones arbitrarias ¿La gente no protesta por desafección o por criminalización y muerte?



Un momento de una manifestación convocada por el gobierno de Dina Boluarte el 12 de diciembre de 2023. (Wikimedia Commons/Roberto GARCÍA BUSTOZA)

La atomización de los partidos políticos no es la razón del problema, es un síntoma, que por sí solo no explica las causas profundas de la degradación institucional. Para entender esto debemos examinar cómo la racionalidad neoliberal se ha impuesto en todos los niveles, en un contexto de racismo y exclusión política y social sistemática. El decreto Fujimorista (Ley 20000) no solo atacó y desmanteló las grandes narrativas programáticas y los "partidos tradicionales". Fue también un ataque ideológico, con el consentimiento tácito del Kuczynski, contra el movimiento social, los movimientos indígenas y campesinos. En un contexto de legalidad y respeto a los derechos humanos, se legitimó la idea de que los poderes económicos, los sectores de la burocracia y las élites locales estaban mejor representados que la política popular era una forma de terrorismo que debía ser aplacada.

"De hecho, las instituciones económicas que sostuvieron el neoliberalismo de los noventa, salvo timidas reformas en los sectores Cultura, Ambiente, e Inclusión Social, se profundizaron."

Con la caída de Fujimori se suponía que estas narrativas serían superadas en un proceso de transición democrática. Pero esta nunca se completó y se desechó la idea de crear un nuevo pacto social. Si bien se difundió el discurso de transición, reconciliación y derechos humanos, los sectores conservadores persistieron en el discurso anti-derechos, racista, y terruquenador. Discursos que se consolidaban oficialmente por los gobiernos post-Fujimori cada vez que emergía la movilización ciudadana sobre cuestiones sociales o ambientales que desafiaban el crecimiento económico. De hecho, las instituciones económicas que sostuvieron el neoliberalismo de los noventa, salvo timidas reformas en los sectores Cultura, Ambiente, e Inclusión Social, se profundizaron. Mucha gente no tuvo más opción que reconciliar lo que Fujimori llamó "neoliberalismo desde abajo". Los partidos políticos respondieron a esa realidad.

El problema de fondo, entonces, no es la atomización de los partidos. El problema es la exclusión política de los sectores populares a raíz de la exclusión social, el racismo, el terrorismo y la criminalización del activismo. Todo esto acentuado por un discurso autoritario y antiderechos humanos que se ha mantenido vigente, evitando la posibilidad de concebir un acuerdo de convivencia mínimo en donde los grupos políticos representen realmente los intereses de los diversos sectores sociales. Hoy las fuerzas anti-transición son las que vienen capturando todo el aparato político, sin vergüenza alguna de sus delitos ni de sus pactos con los poderes económicos de arriba — las élites económicas ascendentes o aquellas herederas de la aristocracia — y de abajo con las economías ilegales.

Un campo aun en disputa

La sociedad civil en el Perú se siente aislada y desprotegida, a merced de la extrema derecha internacional que ha pretendido que sigan aprobando leyes e implementando políticas pro crimen e impunidad.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron contra el indulto a Alberto Fujimori y la ley que protege a los que perpetraron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. En igual sentido se pronunciaron Estados Unidos de América, las Naciones Unidas, Las Embajadas de Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega emitiendo un comunicado contra los hechos de deterioración de los Derechos Humanos. El Comité Anti-Corrupción de la OCDE, organización a la que el Perú busca adherirse, remitió una comunicación al Estado peruano recordando su preocupación por una norma que debilita la "colaboración eficaz" para enfrentar el crimen organizado.

Para la extrema derecha autodenominada "soberanista" y "antiglobalista" nada de esto puede influenciar los asuntos internos. Dice que el Perú es un autoritarismo que camina firmemente a convertirse en una dictadura a toda regla no es alarmismo. Luego de copiar con sus aliados a organismos autónomos como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, la extrema derecha buscó salir de la presión contenida electoral a sus adversarios políticos y remover al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para designar uno funcional a sus intereses. Varias propuestas de reformas al sistema judicial que otorgan privilegios al poder político para controlar a jueces y fiscales buscan formalizar la esencia dictatorial del régimen.

A las organizaciones sociales, como lo hicieron en el pasado, solo les queda paralizar. A la comunidad internacional y académicos pronunciaron con más fuerza. Y a los propios actores políticos dar la batalla desde adentro. Porque es obvio que cuando digo que el Estado peruano es un Estado lumpen, no me refiero a cada oficina y funcionario del Estado. Me refiero a aquellas redes de poder que dominan el Congreso, el gobierno y ciertos organismos autónomos.

El Estado es un campo de disputa y aún hay unos pocos espacios de resistencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y locales, y los propios ministerios. No obstante, debe existir una narrativa común, un acuerdo mínimo. La única forma de resistir el embate es tener claro que el proyecto político articulador inmediato en el Perú debe ser deslumpenizar la política y el Estado.

Roger Melino es profesor asociado de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Investiga temas relacionados con la ecología política, la gobernanza ambiental y derechos humanos.

Tags: Perú, elecciones, Protestas masivas, Alberto Fujimori

Like this article? Support our work. Donate now.

NACLA c/o NYU CLACS, 53 WASHINGTON SQ, SOUTH PL. 4W, NEW YORK, NY 10012 TEL: (212) 992-6965

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTERS

Support NACLA! As the Americas stand at a crossroad, NACLA's research and analysis remains as important as ever. Can we count on your support our work?

DONATE NOW!

From NACLA Partners



Facebook Twitter Instagram

Copyright NACLA 2019. The North American Congress on Latin America is a 501(c)3 not-for-profit organization.